

02-2006

ce

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas y veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil once.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por EMPRESA TRANSMISORA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ETESAL S.A. DE C.V., del domicilio de Antiguo Cuscatlán, por medio de su apoderado general judicial licenciado Ricardo Antonio Mena Guerra, en contra del Jefe del Departamento de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Soyapango, por los actos administrativos siguientes:

a) Resolución emitida a las catorce horas del día uno de diciembre de dos mil cinco, mediante la cual rectificó el impuesto mensual y determinó la obligación tributaria al treinta y uno de octubre de dos mil cinco, recargo de cinco por ciento (5%) en concepto de pro-fiestas, recargo de intereses moratorios y multa por pago extemporáneo a ETESAL S.A. DE C.V.

b) Resolución dictada a las nueve horas del día veintiuno de diciembre de dos mil cinco, que resolvió no ha lugar el escrito de formulación y fundamentación de descargos presentado por ETESAL S.A. de C.V. el día nueve de diciembre de dos mil cinco.

Han intervenido en el presente proceso la parte actora en la forma indicada, el Jefe del Departamento de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Soyapango como autoridad demandada, y las licenciadas Ana Cecilia Galindo Santamaría y Carmen Haydeé Padilla Bonilla, en calidad de Agentes Auxiliares delegadas del Fiscal General de la República.

I. CONSIDERANDOS:

A. ANTECEDENTES DE HECHO.

ALEGATOS DE LAS PARTES.

1. DEMANDA.

a) Autoridad demandada y Acto Impugnado.

El apoderado de la sociedad actora dirigió su pretensión contra el Jefe del Departamento de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Soyapango, por los actos administrativos descritos en el preámbulo de esta Sentencia.

b) Circunstancias Fácticas.

Relató el apoderado de la sociedad demandante que ETESAL S.A. de C.V. se constituyó como sociedad el día cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con la finalidad de desarrollar la actividad industrial consistente en transformar y transferir la energía eléctrica del generador hacia los distintos distribuidores, a efecto que éstos la comercializaran con los consumidores usuarios. Señaló que en el año dos mil uno la

Alcaldía Municipal de Soyapango calificó a ETESAL S.A. de C.V. como empresa industrial y fábrica, según la Tarifa de Arbitrios de dicha Municipalidad, sin embargo en el año dos mil dos el referido Municipio estableció a través de distintas diligencias, el cobro de tributos para *los periodos del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve al treinta de abril de dos mil dos*. Dichas providencias fueron objeto del amparo constitucional 1178-2002, el cual por un mal planteamiento fue desfavorable para los intereses de la demandante.

Agregó que totalmente foráneo a los periodos tributarios antes aludidos, el día uno de diciembre de dos mil cinco ETESAL S.A. de C.V. fue notificada del acto administrativo dictado por el Jefe del Departamento de Registro Tributario del Municipio de Soyapango, en el cual estableció de conformidad con los artículos 72, 81 y 107 inciso 2º de la Ley General Tributaria Municipal rectificar el impuesto mensual conforme a lo prescrito en el artículo 19 del mismo cuerpo legal y determinar la obligación tributaria al treinta y uno de octubre de dos mil cinco, recargo de cinco por ciento (5%) en concepto de pro-fiestas, recargo de intereses moratorios y multa por pago extemporáneo a ETESAL S.A. DE C.V.

Sostuvo que, en el intento de ejercer los derechos de audiencia y defensa regulados en los artículos 2 y 11 de la Constitución de la República y 106 Sección II Capítulo III de la Ley General Tributaria Municipal, presentó escrito el día nueve de diciembre de dos mil cinco con atención al Jefe del Departamento de Registro Tributario del Municipio de Soyapango, en el que se realizaban una serie de descargos a la determinación de la obligación tributaria, solicitando que se diera el trámite de Ley y se abriera a pruebas por el plazo correspondiente. Sin embargo, el día veintidós de diciembre de dos mil cinco ETESAL S.A. de C.V. fue notificada del acto emitido el día veintiuno del mismo mes y año por el referido funcionario, en el cual resolvió no ha lugar el escrito de formulación y fundamentación de descargos presentado, por improcedente.

Finalmente señaló que los actos impugnados determinaron impuestos adeudados desde mayo de dos mil dos hasta octubre de dos mil cinco, gravámenes que según lo manifestado por el funcionario demandado pueden imponerse a ETESAL S.A. de C.V. sin que exista un procedimiento administrativo previo en el que se otorguen todas las garantías del debido proceso legal.

c) Disposiciones o Derechos que se alegan violados.

El apoderado de la sociedad demandante alegó que los actos impugnados son nulos de pleno derecho por la transgresión de:

1. La Competencia del Funcionario establecido en los artículos 86 inciso final de la Constitución de la República, 72, 74 y 109 de la Ley General Tributaria Municipal: de conformidad con la normativa aplicable la autoridad demandada no es competente para dictar actos como los impugnados en el presente proceso, lo cual los vuelve

inconstitucionales e ilegales. Adicionalmente alegó que el funcionario demandado no era competente por si mismo, para imponer una sanción como la multa establecida en el primer acto impugnado y ratificada en el segundo, ya que el único mecanismo que lo hubiera habilitado para tal efecto era la delegación del Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, lo cual debió ser relacionado en el mismo porque no puede presumirse su existencia en virtud que es un elemento de orden público.

2. Los Derechos de Audiencia, Defensa y Debido Proceso prescrito en los artículos 2 y 11 de la Constitución de la República: dado que no se le escuchó ni se le dio la oportunidad de ofrecer prueba relevante en el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, debido precisamente a la total carencia del procedimiento previo establecido en los artículos 105, 106 y 110 de la Ley General Tributaria Municipal.

3. La Presunción de Inocencia regulada en los artículos 12 inciso 1° de la Constitución de la República, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y 1301 del Código de Procedimientos Civiles: pues en el primer acto la autoridad demandada impuso ipso facto una multa a ETESAL S.A. de C.V. como consecuencia del supuesto pago extemporáneo de un tributo, sin haberle dado a su representada la oportunidad de presentar pruebas y alegatos de descargo. Añadió que el segundo acto ratificó dicha transgresión nulificando totalmente la oportunidad de defensa, dando por sentada la culpabilidad de la demandante.

4. El Principio de Culpabilidad regulado en el artículo 12 de la Constitución de la República: ya que los actos impugnados no establecen ni de manera vaga el nexo o ligamen entre ETESAL S.A. de C.V. y el supuesto hecho que se cuestiona, puesto que no se puede sancionar el pago extemporáneo de un tributo que no ha sido determinado conforme al procedimiento legal.

5. Principio de Legalidad por violación al Principio de Verdad Material, establecido en los artículos 86 inciso final, 131 ordinal 6°, 204 ordinal 1°, 231 inciso 1° todos de la Constitución de la República y artículos 3, 4 y 7 de la Ley General Tributaria Municipal: ya que principalmente según el Principio de Legalidad en materia tributaria los impuestos solo pueden ser establecidos en virtud de una Ley formal y que la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico solo pudiendo realizar aquellos actos que autorice el mismo, lo cual está en estrecha vinculación con el principio de Verdad Material el cual presupone que las actuaciones de la Administración Tributaria se ampararán en la verdad material que resulte de los hechos investigados y corregidos.

Añadió, que los cargos realizados a su representada con base al artículo 3 numeral 18 de su Tarifa General de Arbitrios son absolutamente errados, ya que ETESAL S.A. DE C.V., es una empresa dedicada a la INDUSTRIA ELECTRICA y como tal sus impuestos debieron ser calculados con base a la tarifa de EMPRESAS INDUSTRIALES Y FABRICAS, contemplada en el artículo 3 numeral 21 literal K) de la Tarifa General de

Arbitrios de Soyapango. Sostuvo que la tarifa aplicada es incorrecta por que en la misma si existe la calificación “INDUSTRIA”, sin embargo no fue aplicada a su mandante. Expresó que su mandante desarrolla la actividad económica de la “INDUSTRIA ELECTRICA”, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Economía de El Salvador como ente controlador de las actividades económicas de las empresas en el Manual de Clasificación Internacional de Industria Uniforme (CIU) de todas las actividades económicas de mil novecientos noventa y ocho; así como en la Ley de Fomento Industrial creada por el Decreto Ley número sesenta y cuatro del dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y uno; y en el artículo 87 de la Ley General de Electricidad que califica a la actividad eléctrica denominándola Industria. Finalmente concluyó que al pertenecer ETESAL S.A. DE C.V. al sector INDUSTRIA debe aplicársele lo dispuesto a “EMPRESAS INDUSTRIALES Y FABRICAS” regulado en el artículo 3 numeral 21 de la Tarifa General de Arbitrios de Soyapango, puesto que esa categoría existe en la Ley y no como erróneamente lo ha realizado el demandado cuando aplicó el artículo 19 de la Tarifa en mención.

d) Petición.

El apoderado de la sociedad demandante solicitó que en sentencia definitiva se declarara la nulidad de pleno derecho o eventualmente la ilegalidad de los actos administrativos impugnados.

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.

La demanda fue admitida, se tuvo por parte a ETESAL S.A. de C.V. por medio de su apoderado general judicial licenciado Ricardo Antonio Mena Guerra. Se requirió informe a la autoridad demandada sobre la existencia de los actos administrativos que se le imputaban y la remisión del expediente administrativo relacionado con el presente caso. Se suspendió provisionalmente la ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados.

3. INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA.

En el primer informe rendido, la autoridad demandada contestó en sentido negativo y remitió el expediente administrativo requerido. Se solicitó el informe a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se notificó al Fiscal General de la República la existencia del presente proceso y se confirmó la suspensión de la ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados.

El Jefe del Departamento de Registro Tributario de Soyapango sostuvo en el segundo informe requerido, que tomando como base la sentencia de Amparo del veintiséis de mayo de dos mil cinco la cual fue favorable a dicho Municipio, pronunció la resolución de las catorce horas del uno de diciembre de dos mil cinco, en la cual aplicó los artículos 72, 81 y 107 inciso 2º de la Ley General Tributaria Municipal, que son claros y entendibles en su contexto, además de lo puntualizado en el artículo 19 de la Tarifa

General de Arbitrios a favor de la Municipalidad de Soyapango, en la que se estableció que los negocios que no aparezcan gravados específicamente en esta tarifa pagaran conforme al numeral 18 del artículo 3 de la expresada Tarifa.

Agregó que el día nueve de diciembre de dos mil cinco la sociedad actora interpuso Recurso de Apelación ante el Concejo Municipal de Soyapango, y no ante el Departamento que emitió la resolución por lo tanto siguiendo el debido proceso y lo señalado en el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, el mismo fue declarado sin lugar.

4. TERMINO DE PRUEBA.

El juicio se abrió a prueba por el término de Ley, dentro del cual la parte actora ofreció prueba documental que fue agregada al presente proceso (folio 44 al 48). Además, mediante escritos presentados los días veintiocho de noviembre de dos mil seis y quince de agosto de dos mil siete, tomando como fundamento los artículos 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 270 del Código de Procedimientos Civiles, el apoderado de la parte actora presentó original de constancia extendida por el Gerente General de ETESAL S.A. de C.V. y la documentación de folios 90 al 95 para que fuera agregada como prueba documental al presente juicio.

5. TRASLADOS.

Posteriormente, se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con los resultados siguientes:

- 1) El apoderado de la sociedad demandante reiteró los argumentos expuestos en su demanda.
- 2) La autoridad demandada sostuvo los puntos expuestos en su informe justificativo de legalidad y agregó que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones tiene registrada a ETESAL S.A. de C.V. como transmisor y no como generador o productor de energía eléctrica, lo cual -a su juicio-, demuestra que la referida sociedad comercializa servicios de transporte de energía eléctrica, por lo que la rectificación de la calificación para con la empresa en mención realizada por la Municipalidad de Soyapango no es errónea.
- 3) La representación fiscal esencialmente sostuvo que el Acuerdo número cuatro agregado a folio 75, facultó al Jefe del Registro Tributario como órgano responsable de la Administración Tributaria del Municipio de Soyapango y en virtud del mismo es competente para emitir resoluciones como las impugnadas en el presente proceso. Agregó que a ETESAL S.A. de C.V. se le respetaron sus derechos de audiencia y defensa y se le siguió el debido proceso, considerando que la referida sociedad interpuso Recurso de Apelación de manera extemporánea y ante el funcionario equivocado. Señaló que la multa impuesta es válida porque ETESAL S.A. de C.V. comercializa servicios de transporte de

energía eléctrica y por otro lado no probó que no se produjo el hecho que configuró la infracción.

De conformidad con el artículo 48 inciso 2° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se solicitó a la autoridad demandada que remitiera el expediente administrativo respectivo, el cual se ha tenido a la vista.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. OBJETO Y LÍMITES DE LA PRETENSIÓN.

El apoderado de la parte actora impugnó los actos administrativos pronunciados por el Jefe del Departamento de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Soyapango, que se describen así:

a) Resolución emitida a las catorce horas del día uno de diciembre de dos mil cinco, mediante el cual rectificó el impuesto mensual y determinó la obligación tributaria al treinta y uno de octubre de dos mil cinco, recargo de cinco por ciento (5%) en concepto de pro-fiestas, recargo de intereses moratorios y multa por pago extemporáneo a ETESAL S.A. DE C.V.

b) Resolución dictada a las nueve horas del día veintiuno de diciembre de dos mil cinco, que resolvió no ha lugar el escrito de formulación y fundamentación de descargos presentado por ETESAL S.A. de C.V. el día nueve de diciembre de dos mil cinco.

Hace recaer la nulidad de pleno derecho de dichos actos esencialmente en la transgresión de:

i. El Principio de Competencia (artículos 86 inciso final de la Constitución de la República, 72, 74 y 109 de la Ley General Tributaria Municipal).

ii. Los derechos de audiencia, defensa y debido proceso (artículos 2 y 11 de la Constitución de la República, 106 y 110 de la Ley General Tributaria Municipal).

iii. La Presunción de Inocencia (artículos 12 inciso 1° de la Constitución de la República, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y 1301 del Código de Procedimientos Civiles).

iv. El Principio de Culpabilidad (artículo 12 de la Constitución de la República).

v. El Principio de Legalidad por violación al Principio de Verdad Material, establecido en los artículos 86 inciso final, 131 ordinal 6°, 204 ordinal 1°, 231 inciso 1° todos de la Constitución de la República y artículos 3, 4 y 7 de la Ley General Tributaria Municipal.

2. NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El apoderado de la Sociedad demandante ha argumentado que los actos que impugna son nulos de pleno derecho, por los motivos antes señalados por lo cual es necesario estudiar a detalle dicha figura en el contencioso administrativo salvadoreño.

2.1. LA NULIDAD “DE PLENO DERECHO”. APLICABILIDAD EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

La premisa básica es que la categoría jurídica actos nulos de pleno derecho, aparece en el ordenamiento jurídico salvadoreño en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con lo cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, encargada de aplicar dicha ley, está facultada -y obligada- a operativizar dicha norma.

a) Regulación en el ordenamiento jurídico salvadoreño.

Si bien la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa recoge expresamente el término nulidad de pleno derecho, no especifica qué tipo de actos encajan en esta categoría, es decir, no hace referencia a los supuestos en que se concretiza dicho vicio.

En el Derecho comparado, los supuestos que dan lugar a la nulidad de pleno derecho suelen recogerse en una norma sustantiva de aplicación general, o ley marco de procedimientos administrativos. No obstante, para abordar el tema de las nulidades de pleno derecho en El Salvador, ha de partirse de un dato esencial: la ausencia de una ley que regule en términos generales qué supuestos dan lugar a las nulidades de los actos administrativos y, en especial, a las llamadas nulidades de pleno derecho, ya que en el resto del sistema jurídico salvadoreño escasamente se ha abordado este concepto.

Al revisar el Derecho comparado, resulta que algunos ordenamientos han trasladado los supuestos de nulidad del Derecho Civil al Derecho Administrativo. Sin embargo, para este Tribunal, el traslado de los supuestos de nulidad en materia civil a la materia administrativa no es una solución idónea atendiendo a la especial naturaleza del Derecho Administrativo. Para el caso, si bien en materia civil se regulan los supuestos de la llamada “nulidad absoluta”, ésta se refiere a actos cuya esencia radica en la voluntad de los particulares, mientras que en los actos administrativos, lo esencial y relevante es lo expuesto por la norma jurídica que los respalda o, en la cual debieron fundamentarse.

b) Aplicabilidad del concepto.

Se ha establecido que la nulidad de pleno derecho es una categoría contemplada en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que es esta Sala la llamada a aplicarla. Si bien el ordenamiento jurídico administrativo no proporciona elementos suficientes que permitan establecer de manera general los casos que se tipifican como nulidad de pleno derecho, esto no puede eximir a esta Sala de la obligación de operativizar el concepto.

En otros términos, si la ley reconoce a la Sala la facultad y el deber de admitir la impugnación y pronunciarse sobre actos viciados de nulidad de pleno derecho, la falta de un ordenamiento que regule de forma expresa tal categoría, no la exime de analizarla y calificarla.

Naturalmente dicha calificación ha de realizarse de forma rigurosa, con razonamientos objetivos y congruentes propios de la institución de la nulidad, y sustentada en el ordenamiento jurídico interno.

Este Tribunal, encargado del control de legalidad de las actuaciones de la Administración Pública, está obligado -ante la eventual impugnación de actos amparada en una nulidad de pleno derecho- a determinar si el vicio alegado encaja o no en dicha categoría.

En este sentido se ha pronunciado ya la Sala de lo Constitucional de esta Corte en el amparo número 384-97, de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el cual sostuvo que *“La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa faculta a la respectiva Sala, para revisar la legalidad de los actos de la Administración Pública, con el objeto de garantizar la imparcialidad del órgano que ha de dilucidar la posible ilegalidad de los mismos. En ese sentido, pese a que la referida ley no establece las causas por las cuales un acto administrativo se reputará nulo de pleno derecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo no puede inhibirse de conocer y pronunciarse sobre la supuesta nulidad de un acto administrativo que se impugne por tal motivo (...)”*.

En dicha resolución se concluyó que esta Sala debía llenar de contenido el referido artículo 7, para lo cual se debían *“atender criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico, asistiéndose del ordenamiento jurídico interno y de la doctrina”*.

Por tanto, esta Sala debe establecer los parámetros esenciales para determinar si una actuación de la Administración Pública encaja en la categoría de nulidades de pleno derecho.

2.2. LA NULIDAD DE PLENO DERECHO COMO UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE INVALIDEZ.

a) La invalidez de los actos administrativos y la competencia de esta Sala.

La invalidez del acto administrativo, es definida por algunos autores como una “situación patológica” del acto administrativo, originada por vicios en sus elementos o porque éste incumple las reglas normativas, formales y materiales que condicionan el ejercicio de la potestad de que se trata. En otros términos se apunta que la validez depende, además de la existencia de los requisitos constitutivos del acto, de su adecuación a la norma.

Para Roberto Dromi la invalidez es la “consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de los principios de legalidad, justicia, y eficacia administrativa”, y la nulidad “es la consecuencia jurídica que se impone ante la transgresión al orden jurídico” (Roberto Dromi: Derecho Administrativo, séptima edición actualizada, ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998).

Conforme al artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, corresponde a esta Sala: “El conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública”.

Las pretensiones objeto de esta jurisdicción se encaminan a propiciar el examen de legalidad de actuaciones administrativas -requisito básico de procesabilidad de la acción

contenciosa administrativa- bajo el fundamento que se han dictado en transgresión a la normativa secundaria de carácter administrativo.

En este orden de ideas, la competencia de este Tribunal es realizar un examen de legalidad de la actuación que se impugne, a fin de determinar si éste fue emitido conforme a Derecho o por el contrario, se encuentra afectado por un vicio que determina su invalidez.

b) El conocimiento extraordinario de la nulidad de pleno derecho.

Debe partirse del hecho que la nulidad de pleno derecho es una categoría de invalidez del acto, pero caracterizada por una especialidad que la distingue del resto de ilegalidades o vicios que invalidan el acto administrativo.

Es generalmente aceptada la cualificación de los vicios o deficiencias que afectan la validez del acto en tres grandes categorías: irregularidades no invalidantes, nulidad relativa o anulabilidad y nulidad absoluta.

Además se distingue la “inexistencia”, patología que se predica respecto de aquellos actos que carecen de los elementos esenciales que los doten siquiera de la apariencia de validez.

En algunas legislaciones se introduce el término nulidad de pleno derecho como el grado máximo de invalidez, ocasionado por vicios de tal magnitud, que desnaturalizan al acto como tal. Según la determinación del legislador o la jurisprudencia, algunos de estos vicios coinciden con los de la llamada “nulidad absoluta” y otros con la inexistencia.

La doctrina no es uniforme al abordar el tema de la nulidad de pleno derecho, pero coincide en reconocerle un alto rango y una naturaleza especial que la distinguen de los otros supuestos de invalidez. Se establece precisamente que ésta constituye el “grado máximo de invalidez”, que acarrea por tanto consecuencias como la imposibilidad de subsanación, imprescriptibilidad e ineficacia *ab initio*. En este orden de ideas, se identifica este grado de nulidad por la especial gravedad del vicio.

Roberto Dromi sostiene que la gravedad del acto nulo no debe medirse por la conducta del agente creador del vicio, sino por la lesión que produzca en los intereses de los afectados, en el orden público y jurídico estatal.

Tomás Ramón Fernández considera que esta nulidad alcanza sólo a los supuestos más graves de infracciones del ordenamiento, los cuales pueden determinarse tras una valoración que exige “una consideración de la intensidad del conflicto, del vicio respecto del sistema mismo y del orden general que dicho sistema crea”.

Javier García Luengo retoma el “evidente” grado de ilegalidad del vicio que afecta al acto nulo de pleno derecho, en ese sentido sostiene que “la especial gravedad de la infracción que afecta el acto administrativo, en ausencia de un expreso pronunciamiento del legislador, deberá entenderse producida cuando el acto contraviene los principios y valores básicos del Estado de Derecho y que constituyen el pilar material de las

constituciones modernas” (Javier García Luengo: La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Editorial Civitas, Madrid, 2002).

Este último tratadista cita como base de esta concepción los orígenes de la jurisprudencia administrativa, la cual: “(...) no ha vacilado en sentar que cuando las Leyes y los Reglamentos administrativos no declaran expresamente nulos los actos contrarios a sus preceptos, la apreciación de si el cometido entraña nulidad depende de la importancia que revista, del derecho que le afecte, de las derivaciones que motive, de la situación o posición de los interesados en el expediente y, en fin, de cuantas circunstancias concurren, que deberán apreciarse en su verdadero significado y alcance para invalidar las consecuencias de los actos o para mantenerlas”.

Tales posturas doctrinarias ilustran respecto al carácter excepcional de las nulidades de pleno derecho.

Como se ha expuesto, nuestra Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no califica ni define la categoría nulidad de pleno derecho, pero la instituye claramente – en concordancia con la doctrina- como una invalidez especial, al habilitar en forma extraordinaria el conocimiento de actos administrativos afectados por dicho vicio, aún cuando no cumplan con los presupuestos procesales que normalmente se exigen para acceder a esta sede.

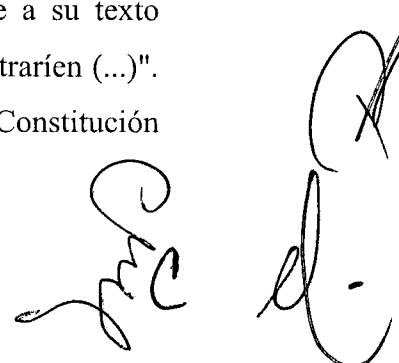
Con todos estos antecedentes, es preciso realizar la búsqueda de estos supuestos especiales de invalidez con una visión integrada de nuestro ordenamiento jurídico.

2.3. LA INTEGRACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Se ha establecido que el ordenamiento jurídico-administrativo no contiene elementos suficientes para la construcción de la categoría jurídica en estudio. Tampoco esta Sala encuentra justificaciones para el traslado de las categorías civiles de las nulidades al Derecho Administrativo, en particular a la materia contencioso-administrativa. Por tal razón debe buscarse en el resto del ordenamiento para completar esta categoría, que como se ha expuesto, se convierte en un imperativo para el juzgador.

En ejercicio de dicha labor de integración, el juzgador debe recurrir a las normas de rango jerárquico superior: la Constitución, primera y máxima de las normas del ordenamiento y la que inspira y en la que debe enmarcarse todo el resto del ordenamiento jurídico.

En este sentido, el artículo 235 de la Constitución establece que "todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen (...)". Por su parte el artículo 246 de la Constitución, señala claramente que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos.



En el examen del ordenamiento constitucional hay una disposición que resulta inevitable valorar debido a su referencia a la categoría de la nulidad: el artículo 164, éste literalmente reza: “*Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa*”.

A la letra de esta disposición constitucional se regula la nulidad de ciertas actuaciones de uno de los Órganos fundamentales del gobierno, por lo que constituye una obligada referencia en la interpretación de la categoría contenida en el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por otra parte, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia ya citada en el apartado 2.1 b) *supra*, hizo alusión a este artículo de la Constitución. Si bien no definió el alcance de dicha disposición, su inclusión en la decisión del Tribunal constitucional parece sugerir a esta Sala un parámetro que deberá considerar para la concreción jurisprudencial de la categoría de las nulidades de pleno derecho.

Es preciso entonces analizar los alcances de la referida norma.

2.4. ANALISIS DEL ARTÍCULO 164 DE LA CONSTITUCION.

a) Destinatario de la disposición.

El primer aspecto a dilucidar sobre los alcances de dicha norma, es establecer qué sujetos resultan vinculados con su regulación. La premisa es que la referida norma alude a la nulidad de las actuaciones de los funcionarios del Órgano Ejecutivo.

Tal alusión expresa al Órgano Ejecutivo - y su consecuente inclusión dentro del capítulo relativo al Órgano Ejecutivo - encuentra su razón de ser en la raíz histórica de la disposición constitucional en estudio, la cual ha estado en nuestro ordenamiento –en términos muy parecidos- desde la Constitución de mil ochocientos ochenta y seis, y con la misma redacción desde la Constitución de mil novecientos cincuenta. En este contexto, la Administración Pública era esencialmente equiparable al Órgano Ejecutivo.

Una interpretación sistemática de la Constitución exige revisar la finalidad que sustenta esta disposición y la posible extensión a otros entes del poder público. El constituyente ha establecido en ella un mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a actos con un vicio excepcional, definiendo *a priori* la consecuencia aplicable. Este resulta ser un importante instrumento en la defensa de los ciudadanos frente a actos del Órgano Ejecutivo que vulneren el ordenamiento jurídico.

A efecto de esta sentencia, interesa determinar si estas mismas consecuencias pueden ser trasladadas al resto de la Administración Pública, de la cual, tal como ha establecido esta Sala y la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias, el Órgano Ejecutivo es sólo una parte.

Debe considerarse que la estructura normativa de la Constitución exige que la concreción de los enunciados genéricos se realice de tal manera que ninguna de sus disposiciones pueda considerarse de forma aislada, es decir, que toda prescripción constitucional debe evaluarse en forma coordinada con el resto del texto.

En este sentido no deben hacerse interpretaciones cerradas, basadas en la estructura formal de la Constitución, en cuanto a que una disposición por estar situada bajo el acápite de un órgano determinado, no podría aplicarse a otro.

Bajo esta perspectiva, la ubicación del artículo 164 de la Constitución en el capítulo relativo al Órgano Ejecutivo, no es impedimento para extender su aplicación hacia actuaciones de otros entes del poder público.

Esta interpretación es acorde a la teleología de la norma, cual es, como se ha indicado, erigir un mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a actuaciones del poder público afectadas con un vicio excepcional y un consecuente control del ejercicio del poder en el Estado constitucional de Derecho.

Resulta especialmente ilustrativo referirse al artículo 86 de la Constitución, norma que contiene la más genérica expresión del Principio de Legalidad en el ordenamiento salvadoreño, la cual identifica en su inciso primero a “los órganos fundamentales del Gobierno” señalando al Legislativo, al Judicial y al Ejecutivo, como expresión de la clásica división de poderes.

En su inciso final - concreción expresa del principio de legalidad - señala que “los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo, y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Así, en principio, dicha norma parecería referirse exclusivamente a los “funcionarios del gobierno”.

Sin embargo, tanto la Sala de lo Constitucional como la Sala de lo Contencioso Administrativo han reconocido que justamente en esta disposición se encuentra el Principio de Legalidad de la Administración Pública, y no únicamente del Órgano Ejecutivo.

En esta misma interpretación integradora de la Constitución, y por las razones arriba señaladas se concluye que la regulación sobre la nulidad contenida en el artículo 164 de la Constitución, para los actos de los funcionarios del Órgano Ejecutivo, puede aplicarse de forma extensiva a los actos del resto de la Administración Pública que adolezcan de dicho vicio.

b) Actuaciones comprendidas.

Por otra parte, el artículo 164 se refiere a “decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones”. En dicha enunciación el constituyente pretende ilustrar respecto al tipo de actuaciones que provienen de dicho sujeto y que podrían resultar nulas, y no agotarlas. Puesto que la aplicación de dicha disposición no está limitada al Órgano Ejecutivo, sino a toda la Administración Pública, debe interpretarse que dicha fórmula enunciativa no es

restrictiva, sino por el contrario, se refiere, a todas las posibles actuaciones administrativas que excedan las facultades que la Constitución establece, cualesquiera sea la forma que adopten.

c) Facultades constitucionales de la Administración Pública.

Hace falta delimitar a cuáles facultades establecidas por la Constitución es aplicable el artículo en examen.

Las facultades para la Administración Pública se conocen como potestades, entendidas como sinónimo de habilitación o títulos de acción administrativa.

En los términos del autor Luciano Parejo “las potestades son, en último término y dicho muy simplificado, títulos de acción administrativa...” (Luciano Parejo Alfonso y otros: Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel, Barcelona, 1994. Página 398).

Esta Sala, en sentencia de las nueve horas del día veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, en el juicio referencia 17-T-96, sostuvo que “la conexión entre el Derecho y el despliegue de las actuaciones de la Administración, se materializa en la atribución de potestades, cuyo otorgamiento habilita a la Administración a realizar sus actos...”, de tal manera que “sin una atribución legal previa de potestades la Administración no puede actuar, simplemente (...)”.

Las facultades de los funcionarios de la Administración Pública encuentran su fundamento último en la propia Constitución, pues de conformidad al artículo 86 - que recoge el Principio de Legalidad abordado en párrafos anteriores -, no puede haber actuación lícita de ningún funcionario que no esté amparada en el ordenamiento jurídico.

En tal sentido, el artículo 164 de la Constitución puede extenderse a todas las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración Pública; es decir, a la suma de las atribuciones y competencias en el desarrollo de la función administrativa.

Interesa ahora determinar qué debe entenderse por exceso de facultades que la Constitución establece.

d) El exceso de las facultades de la Administración Pública.

En primer lugar, el exceso a que se refiere el citado artículo es a todo lo que esté fuera del ámbito de facultades o potestades, por estar más allá de éstas o por desviarse de las mismas, lo cual incluye la posibilidad de que –estando obligada- la Administración Pública simplemente no las ejerza. En tal sentido, el exceso debe ser entendido inicialmente en su acepción más amplia, es decir, como cualquier desviación por parte de la Administración Pública del mandato contenido en el ordenamiento jurídico.

El artículo 164 de la Constitución pretende proteger el ordenamiento en su expresión normativa superior: es un mecanismo de defensa de la Constitución ante actos nulos de la Administración. En este orden de ideas, los excesos de las facultades que la

Constitución establece, relevantes para la categoría de nulidad del artículo 164 de la Constitución, son aquellos que vulneren disposiciones de la misma.

En consecuencia, será nulo el acto dictado por la Administración Pública en ejercicio de una facultad administrativa, cuando dicha transgresión trascienda en una vulneración a la Constitución.

e) Diferencia entre actos nulos y nulos de pleno derecho.

Como se expuso en párrafos anteriores, la nulidad de pleno derecho, a la luz de la doctrina, constituye el “grado máximo de invalidez”, que acarrea por tanto consecuencias como la imposibilidad de subsanación, imprescriptibilidad e ineficacia *ab initio*.

Como también se ha establecido, el artículo 7 de nuestra Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa recoge esta categoría precisamente como un grado de invalidez especial, en tanto la constituye como un presupuesto al conocimiento extraordinario de supuestos que de otra manera serían inadmisibles.

El artículo 164 de la Constitución señala que los actos nulos “no deberán ser obedecidos”, reconociendo con ello que estos actos adolecen de un vicio de tal magnitud, que los invalida totalmente y los dota de ineficacia *ab initio*. En otras palabras, el que no deban ser obedecidos indica que para nuestra Constitución estos actos adolecen de un vicio tal, que no producen ningún efecto, es decir, son radicalmente inválidos para el Derecho. La especialidad en este caso, vendría asociada al rango de la norma vulnerada.

En conclusión, las nulidades de pleno derecho de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa pertenecen a la categoría de actos nulos contenidos en la disposición constitucional. Ello no excluye la posibilidad que existan otros tipos de actos nulos, pero ciertamente a la luz del artículo 164 de la Constitución, los actos nulos de pleno derecho del artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa encajan en esta categoría.

Por supuesto, para determinar si en efecto estos actos adolecen de este vicio de nulidad de pleno derecho, hará falta que un juez así los declare, tanto por ejercicio de sus propias atribuciones constitucionales - artículo 172 de la Constitución- en función de la seguridad jurídica, la igualdad y la propia estabilidad y supervivencia del Estado de Derecho. Sostener que no debe mediar un juez que declare la nulidad y, en consecuencia, el acto no debe ser obedecido, implicaría una amenaza imponderable para el Estado, en la medida en que cada ciudadano podría entender dicho concepto a su conveniencia y simplemente desobedecer aquello que no le agrade o favorezca porque a su juicio es nulo. De ahí que sea necesario que el juez declare que determinado acto administrativo es nulo por ser contrario al ordenamiento constitucional.

Es el Órgano Judicial el ente encargado de la aplicación de la norma, y para este Tribunal, la competencia establecida en el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, -es decir, “el conocimiento de las controversias que se

susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública”- y la inclusión de la categoría de actos nulos de pleno derecho en el artículo 7 de la misma Ley, justifican el conocimiento de dichos actos en la jurisdicción contencioso administrativa.

2.5. LA CONSTITUCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA SALA. SUPUESTOS QUE DAN LUGAR A LA NULIDAD DE PLENO DERECHO.

Tal como se ha establecido, los actos nulos de pleno derecho regulados en el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son una expresión de los actos nulos a que se refiere el artículo 164 de la Constitución. Sin embargo, esta determinación genérica debe ser valorada frente al ámbito de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Los actos regulados en este artículo son actos de naturaleza administrativa, los cuales se desvían del ejercicio de una potestad administrativa y, consecuentemente, vulneran la Constitución.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, establece que la competencia de esta Sala se refiere al conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública, es decir la competencia de este Tribunal se refiere al control de legalidad de los actos de la Administración Pública.

Dicha competencia no se modifica por la vía de conocimiento excepcional regulada en el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues tal como se ha establecido, la comprobación de una nulidad de pleno derecho únicamente permite obviar ciertos requisitos de admisibilidad. De ahí que será bajo los presupuestos de esa misma competencia, que esta Sala conocerá de las alegaciones de actos nulos de pleno derecho.

Por tanto, puede afirmarse que para que un acto nulo de pleno derecho pueda ser conocido por la Sala, se requiere que dicho acto vulnere el ordenamiento jurídico-administrativo, es decir, una norma contenida en el bloque de legalidad secundario - el cual constituye el parámetro de control de este Tribunal - y que ello trascienda en una vulneración a la Constitución.

Es necesario advertir que no toda ilegalidad o violación conlleva una nulidad de pleno derecho, es decir, la mera violación al principio de legalidad no conlleva nulidad de pleno derecho, lo cual rompería “el principio de mera anulabilidad”; el carácter excepcional con el que rige la nulidad de pleno derecho se convertiría en regla general.

Con tales antecedentes, se concluye que, para efectos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la nulidad de pleno derecho en el ordenamiento jurídico-administrativo salvadoreño es una categoría especial de invalidez del acto administrativo, que se configura cuando concurren los siguientes supuestos:

- 1) Que el acto administrativo transgreda la normativa secundaria -de carácter administrativo-, por haberse emitido en exceso, o fuera de las potestades normativas;
- 2) Que esta vulneración trascienda a la violación del ordenamiento constitucional;
- 3) Que esta transgresión se concrete en la esfera jurídica del sujeto que alega la nulidad.

En este orden de ideas, será en cada caso en que este Tribunal determine si se configura o no tal categoría de nulidad.

Lo anterior implica que no ha de realizarse un catálogo cerrado de los supuestos que configuran la nulidad de pleno derecho, sino, compete a esta Sala, a partir de los parámetros enunciados, determinar (cuando se alegue) si el vicio que se le presenta encaja en esta categoría.

Esta Sala procederá al análisis correspondiente de los argumentos vertidos por las partes para determinar si los actos impugnados adolecen de los vicios de nulidad invocados.

3. NORMATIVA APLICABLE.

i) Constitución de la República.

ii) Ley General Tributaria Municipal.

iii) Tarifa General de Arbitrios a favor del Municipio de Soyapango.

4. VIOLACION AL PRINCIPIO DE COMPETENCIA (artículos 86 inciso final de la Constitución de la República, 72, 74 y 109 de la Ley General Tributaria Municipal).

Ha alegado la parte actora que de conformidad con la normativa aplicable al caso, la autoridad demandada no era competente para dictar actos como los impugnados en el presente proceso, lo cual los vuelve inconstitucionales e ilegales. Adicionalmente, expresa que el funcionario demandado tampoco era competente por sí mismo para imponer una sanción como la multa establecida en el primer acto impugnado y ratificada en el segundo, ya que el único mecanismo que lo hubiera habilitado para tal efecto era la delegación del Alcalde previo Acuerdo del Concejo Municipal, lo cual debió ser relacionado en el mismo porque no puede presumirse su existencia en virtud que es un elemento de orden público.

a) Sobre la Atribución de Competencias.

La doctrina administrativista coincide en señalar que la competencia es un elemento intrínseco a la naturaleza de los órganos, entes, e instituciones del Poder Público. El tratadista Ramón Parada (Derecho Administrativo, Tomo II, Decimocuarta Edición, Marcial Pons, Madrid, 2000) señala al respecto: "En términos muy elementales, la competencia puede definirse como la medida de la capacidad de cada órgano y también como el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano y que unos y otros están autorizados y obligados a ejercitar". Por su parte, Roberto Dromi (Derecho Administrativo, séptima edición actualizada, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998) en similares términos explica que la competencia "es la esfera de atribuciones

de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente".

Resulta ilustrativo citar lo que la Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia ha señalado al respecto: "desde el punto de vista técnico-jurídico y con carácter orgánico, el concepto de atribución o competencia puede entenderse como la capacidad concreta que tiene un determinado ente estatal, de suerte que al margen de la materia específica asignada no puede desenvolver su actividad; mientras que desde un carácter sistemático, la atribución o competencia consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación dadas a un órgano por razón de los asuntos que están atribuidos de un modo específico. Así, una atribución puede identificarse como la acción o actividad inherente que por mandato constitucional o legal desarrolla un órgano estatal o ente público; es decir, los poderes, atribuciones y facultades conferidas para el normal funcionamiento y cumplimiento de una labor" (Sentencia de inconstitucionalidad referencia 33-37-2000, de las ocho horas y veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil uno).

Por otra parte, esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias que la competencia constituye un elemento esencial de todo acto administrativo y debe ser entendida como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano. Como elemento esencial del acto administrativo, la competencia condiciona necesariamente su validez.

Así mismo, se ha establecido que la competencia es en todo caso una determinación normativa, es decir debe siempre encontrar su fundamento en una norma jurídica. Es el ordenamiento jurídico el que sustenta las actuaciones de la Administración mediante la atribución de potestades, habilitándola a desplegar sus actos. "En síntesis, el acto administrativo requiere una cobertura legal, es decir, la existencia de una potestad habilitante que otorgue competencia al órgano o funcionario emisor" (Sentencia Definitiva dictada en el proceso contencioso administrativo referencia 69-S-96, de las nueve horas y cuarenta y siete minutos del día quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete).

Tema trascendental del Estado de Derecho será entonces la manera concreta en que el ordenamiento jurídico atribuye las diversas competencias. Puede afirmarse que en el ordenamiento jurídico salvadoreño, las competencias sólo pueden ser atribuidas a los diversos órganos y funcionarios mediante normas constitucionales, reglamentos autónomos y leyes en sentido formal, es decir, normas provenientes de la Asamblea Legislativa. Esto último se desprende del inciso primero del artículo 86 de la Constitución, que reza en lo pertinente: "El Poder Público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes". Ello se complementa con el ya referido inciso tercero del mismo artículo: "Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no

tienen más facultades que las que expresamente les da la ley". Finalmente, el artículo 131, número 21 establece que: "Corresponde a la Asamblea Legislativa: 21º Determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por esta Constitución no se hubiese hecho".

Lo anterior permite aseverar que en el ordenamiento jurídico salvadoreño, la atribución de competencias, cuando no estuviera reglada en la Constitución o en los reglamentos autónomos derivados del mismo texto constitucional, será una materia reservada a Ley formal. Como es sabido, la reserva de Ley impide que otros órganos regulen una determinada materia o que el mismo Órgano Legislativo se desvincule de dicha potestad normativa vía la deslegalización de la materia. Como la Sala de lo Constitucional ha afirmado: "la reserva de Ley es la garantía de que un determinado ámbito vital de la realidad, dependa exclusivamente de la voluntad de los representantes de aquellos involucrados necesariamente en dicho ámbito: los ciudadanos" (Sentencia de inconstitucionalidad referencia 27-1999 de las nueve horas del día seis de septiembre de dos mil uno).

Esta decisión del constituyente de apartar para el legislador ordinario la materia particular de la atribución de competencias, contribuye indudablemente al control del poder público concretado en la Administración, que de lo contrario podría autoatribuirse competencias, alejándose del mandato de su soberano: los administrados. Así ha afirmado la Sala de lo Constitucional: "la preferencia hacia la Ley en sentido formal para ser el instrumento normativo de ciertas materias, proviene del plus de legitimación que posee la Asamblea Legislativa por sobre el resto de órganos estatales y entes públicos con potestad normativa, por recoger y representar la voluntad general" (Sentencia citada en el párrafo que antecede).

Es por lo anterior que la competencia es un elemento esencial del acto administrativo, que como tal condiciona su validez. En vocablos sencillos, ésta se define como la medida de la potestad que pertenece a cada órgano.

b) Aplicación al caso en debate.

Corresponde ahora analizar a partir del estudio de la Ley General Tributaria Municipal, si el funcionario demandado tenía competencia para la determinación de la obligación tributaria y la sanción realizada a ETESAL S.A. DE C.V. mediante los actos impugnados.

El artículo 72 de la Ley General Tributaria Municipal establece que la determinación, aplicación, verificación, control, y recaudación de los tributos municipales, conforman las funciones básicas de la *Administración Tributaria Municipal*, las cuales serán ejercidas por los Concejos Municipales, Alcaldes Municipales y sus organismos dependientes. A su vez, el artículo 81 de la normativa en estudio regula que "La administración tributaria municipal tendrá facultades para la determinación de la

obligación tributaria y para sancionar las contravenciones tributarias; facultades que se regulan y aplican de conformidad a los procedimientos establecidos en el CAPITULO III del presente Título.” Finalmente el artículo 74 de la Ley General Tributaria Municipal prescribe que los “funcionarios de la administración tributaria municipal, previo acuerdo del concejo podrán autorizar a otros funcionarios o empleados dependientes de ellos para resolver sobre determinadas materias o hacer uso de las atribuciones que esta Ley o las leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales les concedan.”

De lo anteriormente expuesto, es dable concluir que la Ley General Tributaria Municipal otorga competencias para la determinación de la obligación tributaria y para la imposición de sanciones, tanto a los Concejos Municipales, como a los Alcaldes y a funcionarios dependientes de éstos. Sin embargo, respecto de los funcionarios dependientes de los Concejos Municipales y Alcaldes, se exige la existencia de un Acuerdo previo que autorice la delegación. En consecuencia, para que las actuaciones del Jefe del Registro Tributario de Soyapango sean legales, es necesario un Acuerdo previo de delegación emitido por el Concejo Municipal de la referida localidad.

Se encuentra agregada a folio 75 del presente expediente fotocopia certificada por notario del Acuerdo Número Cuatro, de Sesión Ordinaria celebrada el día dieciocho de junio del año dos mil tres, por el Concejo Municipal de Soyapango, mediante el cual la referida autoridad acordó facultar al Jefe del Registro Tributario como órgano responsable de la Administración Tributaria, para efectuar las funciones básicas de determinación, aplicación, verificación y control de los tributos municipales y además se le autorizó para que firme las resoluciones pertinentes, establezca y firme las resoluciones y sanciones por contravenciones cometidas por los contribuyentes y todas aquellas resoluciones en materia de tributación municipal. Lo anterior excluye el argumento de falta de competencia expuesto por la parte actora, ya que de conformidad con el Acta relacionada el funcionario demandado es competente para emitir actos como los impugnados en el presente proceso.

5. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA, DEFENSA Y DEBIDO PROCESO (artículos 2 y 11 de la Constitución de la República, 106 y 110 de la Ley General Tributaria Municipal).

La parte demandante alega que los actos impugnados son nulos de pleno derecho, por violación a los derechos constitucionales de audiencia, defensa y debido proceso, principalmente debido a que con el acto -originario- emitido a las catorce horas del día uno de diciembre de dos mil cinco, se rectificó el impuesto mensual y se determinó a cargo de ETESAL S.A. DE C.V. obligación tributaria para los períodos comprendidos del mes de mayo de dos mil dos al treinta y uno de octubre de dos mil cinco, además de un recargo de cinco por ciento (5%) en concepto de pro-fiestas y de intereses moratorios, así como multa por pago extemporáneo, sin seguirle previamente el procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley General Tributaria Municipal. La autoridad